



Los educadores que siguen en protesta están afiliados al Sindicato Patriótico de la Educación (Sinpae). ESTEBAN OVIEDO

Daniela Cerdas E.
daniela.cerdas@nacion.com

Varios docentes, quienes acumulan 155 días en huelga, remitieron una carta al Ministerio de Educación Pública (MEP) para exigirle que les paguen los pluses que la institución otorga por realizar labores adicionales.

No obstante, la decisión del MEP es reconocerles estos beneficios extra o sobresueldos por funciones especiales solo a los profesores que laboren.

Los educadores que hicieron el reclamo afirman que pertenecen al Sindicato Patriótico de la Educación (Sinpae), el único que está en huelga desde el 10 de setiembre del 2018 contra la reforma fiscal, la cual ya fue aprobada y está en vigencia.

Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del MEP, dijo que 10 funcionarios afiliados a ese sindicato conti-

MEP SOLO CANCELARÁ INCENTIVOS A LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJEN

Docentes con 155 días en huelga exigen pluses

➤ Alegan que es discriminatorio pagarles solo a quienes laboren

núan en huelga, por lo cual tiene un proceso disciplinario abierto para despedirlos por abandono de trabajo.

Para Díaz, “ya no se justifica” que se mantengan en el movimiento. Sin embargo, estos docentes entregaron una carta machote a sus jefes in-

mediatos, en donde les indican que siguen en huelga hasta que el Tribunal Laboral del II Circuito Judicial de San José declare la legalidad o ilegalidad del movimiento.

Injusto. En la misiva alegan que es discriminatorio repartir

los sobresueldos solo entre los profesores que están trabajando, y que tal decisión violenta “el derecho humano constitucional y laboral”. “Uno de los pilares de la reforma laboral es el combate frontal contra la discriminación, conforme el artículo 73 de Código de Tra-

DESDE SETIEMBRE 2018

Una escuela completa sigue sin recibir clases

Aunque son pocos los docentes que no están yendo a trabajar, estos tienen a su cargo estudiantes que no están recibiendo lecciones y se están viendo perjudicados.

Por ejemplo, los 11 niños de la escuela unidocente Las Garzas, en Upala de Alajuela, no han recibido lecciones desde el 10 de setiembre del año pasado debido a que la directora y única maestra del centro educativo, llamada Nidia Cerdas, está en huelga desde esa fecha. Ella afirma pertenecer al Sinpae.

Los padres de familia de los 11 alumnos han solicitado al MEP que otro docente llegue a dar las clases.

La directora de Recursos Humanos del MEP, Yaxinia Díaz, dijo que va a sustituir a los huelguistas mientras se completa el proceso de despido, pues el servicio educativo no se puede interrumpir.

bajo (...), la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos (sic).”

“Esto incluye como actividad discriminatoria estarse repartiendo recargos, prórrogas y otras; debe ser igual para los que estamos en huelga. Son medidas discriminatorias el reparto de recargos, prórrogas, aumento de lecciones en propiedad, entrega de propiedad y otros, solamente con empleados que no están en huelga”, se lee en la carta.

La carta la envió al MEP una educadora de Religión, de apellido Castro, de la Escuela Ramón Barrantes, en Heredia. También la remitieron tres docentes del Liceo Nocturno Alfredo González Flores, en esa misma provincia.

La oficina de prensa del MEP confirmó la autenticidad de las cartas y dijo que el procedimiento de despido por abandono de trabajo contra esos docentes continúa. ■

SOLICITA SOLUCIONES REALES, SIN DEMAGOGIA NI INTERESES POLÍTICOS

Obispo de Ciudad Quesada pide parar crisis en Crucitas

Ángela Ávalos R.
aavalos@nacion.com

“Ya es hora de que, como país, pongamos a Crucitas en el orden de las prioridades, con soluciones reales, no pasajeras, sin demagogia y sin intereses políticos y económicos inmediatos, sobre todo con claridad y apertura de mente, pues la familia humana se está destruyendo alrededor de lo que allí acontece”.

Con estas palabras, el obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita Herrera, hizo un llamado este martes a colocar como prioridad el daño ambiental y la crisis social

que se está viviendo en la finca Vivoyet, en Crucitas de Cutris, San Carlos.

En ese terreno, de 805 hectáreas, cientos de personas se han dedicado a extraer ilegalmente oro y han obligado a las autoridades policiales a realizar incursiones para intentar poner un freno a la actividad.

Desolador. El obispo reconoce que la situación que ahí se da está perjudicando el ambiente y rompiendo los vínculos familiares.

“Las acciones al margen de la ley, producto de una ambición desbordada y con grave

perjuicio del ambiente, incluso exponiendo la propia vida, son algunos de los hechos que se viven en esta zona desde hace ya muchos meses.

“He manifestado, en otras oportunidades, la movilidad de miembros de familias, el potencial riesgo de ruptura de estas, la desertión de jóvenes en la etapa estudiantil e incluso la manipulación de poblaciones en riesgo social. Hablo de personas en pobreza o pobreza extrema, o poblaciones migrantes, por citar algunos casos.

“Es un hecho que la solución no viene solo de un sector.



“La familia humana se está destruyendo alrededor de lo que ahí (en Crucitas) acontece”, sentenció el obispo Garita. MARVIN CARAVACA

Debe haber participación de instituciones públicas y privadas, de autoridades locales y, desde luego, de una decisiva intervención estatal”, agregó

el religioso.

El pronunciamiento sucede cuando, según dijo, el Ministerio Público ha revelado crimen organizado en la zona. ■